

San Miguel, dieciséis de enero de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

Por sentencia de nueve de octubre de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en los autos RIT O-828-2023, se rechazó la demanda de declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales adeudadas, que fuera deducida por doña Antonia Paz de Teresita de Jesús Guajardo Brito, nutricionista, en contra del Servicio Salud Metropolitano Sur, representado legalmente por Mariano Moreno Boza, sin costas.

Contra dicha sentencia, la parte demandante interpuso recurso de nulidad, fundado en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo y, en subsidio, se invocó la del artículo 477 del Código del ramo, por infracción de ley.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los abogados presentes en estrado.

**Considerando:**

**Primero:** Que el recurso de nulidad se asila principalmente en la causal del artículo 478, letra b), del Código del Trabajo, ya que –se dice- la sentenciadora infringió sustancialmente los principios que emanan del sistema probatorio de la sana crítica, específicamente según las reglas de la lógica.

Indica que el fallo de nueve de octubre del presente año, ha infringido las reglas de la sana crítica, existiendo una motivación defectuosa, toda vez que el examen de las pruebas del proceso no conduce lógicamente a la conclusión que convence a la sentenciadora, existiendo por lo tanto un error lógico de identidad y por desatender el principio de primacía de la realidad, toda vez que, desconociendo las máximas de la experiencia y en especial la legislación aplicable, concluyó que la relación contractual entre las partes no puede ser calificada como una de subordinación y dependencia, en los términos del artículo 7º del Código del Trabajo.

Asevera que la infracción a la lógica y a la identidad se gesta en la medida que la sentenciadora afirma que no es posible encuadrar la situación fáctica dentro del marco de una relación laboral, pero dicha proposición no puede ser verdadera toda vez que fácticamente (y según el principio de primacía de la realidad) se cumplían los elementos de los que versa el artículo 7º del Código del Trabajo, haciendo caso omiso a la forma en la cual durante más de 2 años las labores fueron realizadas, cuestión fundamental para saber si se trata de una labor específica o no.

Invoca el testimonio de Catalina Andrea Madrid Manríquez, quién señala expresamente que el Servicio impartía instrucciones por parte de una jefatura en



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TQPRXSYWFJG

específico, que organizaba cambios de funciones, por las razones que aclara. A la vez, prosigue, el testigo Cristian Gabriel Monroy Yáñez, reitera que quien controlaba el desarrollo de las funciones era la jefa Isabel Matamala, quien ejercía como jefa directa de las nutricionistas y auxiliares, dado que su cargo era jefa de nutrición. Cabe señalar que, del relato del testigo en comento, se desprende expresamente que dicha jefatura controlaba la jornada de sus dependientes a través de un huellero, marcando la entrada y salida de cada funcionario, quienes señalan, estaban sujetos a jornadas de lunes a viernes.

También observa que la prueba documental reafirma lo precedentemente indicado, pero que no es analizada por la sentenciadora, como la planilla de registros de horas realizadas por doña Antonia Guajardo Brito, la cual no tuvo mención alguna en la respectiva sentencia. Esta prueba consistía en el registro de las horas realizadas con su respectivo día, horario y observaciones, durante el periodo comprendido entre julio de 2021 hasta agosto de 2023, lo que da cuenta de que efectivamente la demandante se encontraba sujeta a una jornada de trabajo no coherente con una contratación a honorarios.

En suma, dice, se incorporó en audiencia de juicio, un conjunto de Convenios de Prestación de Servicios, celebrados entre el Hospital de Enfermedades Infecciosas y Antonia Guajardo Brito, en las fechas que precisa, de similares características, donde en la cláusula quinta se estipula lo siguiente: “La contratada será supervisada en el cumplimiento de horario y servicios contratados por su Jefatura Directa, o a quien se subrogue”

A su vez, en la cláusula sexta se indica lo siguiente: “Se establece Jornada Desempeño modalidad diurna lunes a jueves de 08:00 a 17:00 y viernes de 08:00 a 16:00, por situaciones extraordinarias se cancelarán horas extras en turnos adicionales a señalarse vía informe mensual por jefatura y autorizadas por el subdirector Administrativo”.

Concluye que todo aquello en conjunto a la declaración de los testigos, da cuenta de la existencia de indicios de subordinación y dependencia, por lo que correspondía tener por correcto lo que en la práctica acaeció entre doña Antonia Guajardo y el Servicio. Las distintas probanzas dan cuenta de una serie de indicios de subordinación y dependencia que no pueden ser interpretadas de forma diversa a la cual hemos señalado en el desarrollo de la presente causal y que, además, no es posible subsumir dentro de la hipótesis de especificidad de la que versa el artículo 11 de la ley 18.834.

**Segundo:** Que, en subsidio de la causal anteriormente desarrollada, la actora dedujo la del artículo 477 del mismo código, esto es, haberse dictado la sentencia con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del



fallo, indicando que la sentencia de marras infringió los artículos 1, 7, 8, 162, 163, 168 y 174 del Código del Trabajo y el artículo 11° de la Ley 18.834.

Consigna que en el transcurso del juicio quedó establecido que la trabajadora cumplió con una obligación de asistencia, una jornada de trabajo, ordenes e instrucciones por parte de una jefatura y otros elementos que versan sobre subordinación y dependencia. Conforme lo anterior, la infracción de ley se argumenta y configura por cuanto existió una relación de causa a efecto entre el error producido y la decisión adoptada por el sentenciador. Así las cosas, de no haber incurrido el tribunal, en los vicios alegados, el artículo 11° de la ley 18.834, no se habría aplicado, y sí, la legislación laboral en su plenitud, en consecuencia, dando lugar a la demanda de autos en todas sus partes.

Si una persona se incorpora a la dotación de un órgano de la administración del Estado bajo la modalidad del artículo 11° del Estatuto Administrativo, pero en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que señala dicha norma- o que tampoco se desarrolla en las condiciones de temporalidad que indica-, sino que, más bien, satisfaciendo una exigencia que la ley reclama de un órgano público, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos ya señalados. Lo anterior, porque dicho Código constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato laboral, el trabajador queda al margen del Estatuto del ramo, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna.

Reitera que la demandante no se encuentra sometida a estatuto especial, porque no ingresó a prestar servicios en la forma que dicha normativa especial prevé, resultando a todas luces inconcuso que la disyuntiva se orienta hacia la aplicación del Código del Trabajo, correspondiendo subsumirlas en la normativa del Código del Trabajo, toda vez que están presentes rasgos característicos de este tipo de relaciones – prestación de servicios personales, bajo subordinación y dependencia y a cambio de una remuneración, según ya se dijo-, no sólo porque la vigencia del Código del Trabajo constituye la regla general en el campo de las relaciones personales, sino porque no es dable admitir la informalidad laboral y suponer que por tratarse de un órgano del Estado, que debe someterse al principio de juridicidad, recogido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, puede invocar esa legalidad para propiciar dicha precariedad e informalidad laboral, la que por lo demás se encuentra proscrita en un Estado de Derecho.



**Tercero:** Que corresponde tener en consideración que la causal de nulidad empleada de la letra b) del artículo 478 del Código laboral permite la revisión de las inferencias realizadas en la evaluación de la prueba vertida en juicio y la subsecuente fijación de los hechos que se han tenido o no por justificados, cuando en esa actividad se cometen errores manifiestos –dice la ley- en la aplicación de las normas de la sana crítica que informan la actividad jurisdicente, lo que supone contrariar los parámetros de la lógica, o los conocimientos científicos o las reglas de experiencia.

**Cuarto:** Que, por lo tanto, en ese acotado ámbito de reproche, se advierte en el recurso ciertas inconsistencias, toda vez que –como se observa de la descripción previa- conjuntamente en él se discurre sobre la ausencia de valoración o fundamentación de la sentencia, su equivocada argumentación y luego en la ausencia o errada ponderación de la prueba recogida, todo lo que excede el marco de discusión permitido en la causal utilizada.

**Quinto:** Así, la denuncia de nulidad se exploya en torno a variados tópicos y aún los errores en la valoración incurridos por la sentenciadora, soslayando la mención de una transgresión particular y circunstanciada de las reglas de la sana crítica, en especial de la lógica o principio de identidad. Su argumentación es genérica e insuficiente en el objetivo pretendido, lo que no permite el análisis del motivo de reproche. Y es insalvable, pues las objeciones como aquellas de no acatar el principio de primacía de la realidad tienen otro carácter que discurre sobre una tesis alternativa de valoración de la prueba, cuestión absolutamente ajena al mecanismo procesal de que se trata.

**Sexto:** Sin perjuicio de lo anterior, la sentencia en sus basamentos sexto a noveno analiza circunstanciadamente la prueba, los fundamentos de la demanda en contraste con las normas legales atinentes, precisa ciertos los hechos y aspectos que justifican acertadamente la conclusión en torno al rechazo de las acciones intentadas.

Es categórico el fallo en el motivo octavo al señalar: *“Que, en este sentido, los testigos que deponen por la propia demandante, Verónica Pizarro Contreras, Catalina Madrid Manríquez y Cristian Monroy Yáñez, se encuentran contestes en que la demandante ingresó por la pandemia Covid, a raíz de la alta demanda de pacientes. Que, en consecuencia, de lo razonado en lo que antecede fluye que si bien las labores desempeñadas por la actora son labores propias de los establecimientos hospitalarios, en el caso particular, se trató de una situación accidental, derivada de los efectos de una pandemia mundial y que requirió, excepcionalmente, de refuerzos en la dotación hospitalaria debido al alto incremento de la demanda de pacientes, es decir, en este caso el carácter*



*accidental de las labores no emana de la naturaleza de las mismas, sino que de la contingencia sanitaria que se vivía a nivel mundial. En este sentido, la testigo Madrid Manríquez, explica que antes había sólo dos nutricionistas clínicas y después debió contratarse una adicional por las necesidades generadas por la pandemia, por su parte, el testigo Monroy Yáñez precisa que la demandante llegó en el tiempo de pandemia ya que había muchos más pacientes, el doble o el triple. Que, seguidamente, la demandante afirma en su libelo que se encontraba sujeta a una jornada de trabajo, afirmación esta que resulta congruente con los convenios suscritos entre las partes y declarado por los testigos Madrid Manríquez y Monroy Yáñez, quienes señalan que debían registrar asistencia, sin embargo, lo anterior no resulta suficiente para modificar la naturaleza de la vinculación contractual existente entre las partes ya que, aun en el evento que los servicios ejecutados por la actora se hayan llevado a cabo con obligaciones de asistencia y cumplimiento de horario, ello no hace aplicable a su respecto la regla del artículo 7° del Código del Trabajo por cuanto dichas condiciones pueden perfectamente pactarse o aplicarse en un contrato remunerado a honorarios, resultando del todo lógico y procedente que, quien contrata los servicios de un tercero, pueda exigir la dedicación de cierto número de horas semanales al cumplimiento del cometido o entregar lineamientos y directrices para ello”.*

*En la decisión se consigna que “la actora omite señalar que ingresó a prestar servicios durante la pandemia por Covid 19 y encontrándose vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. En este sentido, es un hecho público y notorio que la pandemia produjo un colapso de los servicios de salud, atendida la alta demanda por parte de la población, haciendo necesario el refuerzo de personal del área de la salud. Que, en dicho escenario, con la finalidad de mantener la continuidad en la atención de las áreas clínicas de la red asistencial, se dictó el ORD C31/N°715, el que regula los mecanismos para poder contar con personal adicional para cubrir las necesidades de la red, estableciéndose, en primer lugar, la contratación honorarios suma alzada, siendo en el marco de dicha contingencia que se dispuso la contratación de la demandante, tal como se desprende de los documentos señalados en los numerales 3 y 4 del considerando sexto precedente. Que, tal como se ha señalado en lo que antecede, las Resoluciones Exentas que aprueban los Convenios a Honorarios de la demandante, consta que la contratación de la demandante se fundamenta en la necesidad de contar con servicios de personal para dar cumplimiento a funciones específicas, labores que no pueden “... cumplirse con los recursos humanos propios de la institución, por no contar con la capacidad técnica o la disponibilidad temporal para ejecutar eficiente y*



*oportunamente los trabajos encomendados y que por ende su omisión o su deficiente cumplimiento ocasionarían un perjuicio al logro de los objetivos y metas institucionales”. Que, en este sentido, los testigos que deponen por la propia demandante, Verónica Pizarro Contreras, Catalina Madrid Manríquez y Cristian Monroy Yáñez, se encuentran contestes en que la demandante ingresó por la pandemia Covid, a raíz de la alta demanda de pacientes”*

**Séptimo:** Que, acotada únicamente la objeción a las reglas de la lógica y principio de identidad, sin más, y aun genéricamente con mención incluso de las máximas de la experiencia, lo cierto es que la sentencia cumple satisfactoriamente con estos enunciados. En efecto, la juez infiere ciertos hechos o su ausencia a partir de definiciones que extrae de la prueba producida, documental y testimonial. Ellas son homogéneas y concordantes entre sí, Y devienen naturalmente de prueba y eventos específicos producidos en juicio, los que son particularmente examinados, de modo racional y particularizando el análisis de documentos y testigos. También, se ciñe a la necesidad de que las afirmaciones fácticas deriven naturalmente de la prueba, sean categóricas, y permitan arribar a una opción distinta a la propuesta en la tesis de la actora; de tal modo que es posible establecer esa conexión natural entre las pruebas y las afirmaciones del fallo, para obtener sus conclusiones.

**Octavo:** Que, entonces, no puede sostenerse que en la sentencia se haya incurrido en una transgresión de la entidad que consagra la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, y es una consecuencia necesaria la desestimación de tal hipótesis.

**Noveno:** Que en cuanto a la causal utilizada subsidiariamente del artículo 477 del Código laboral por infracción a lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 162, 163, 168 y 174 del Código del Trabajo y el artículo 11º de la Ley 18.834, y según las circunstancias fácticas que el tribunal define –como se ha visto- sin reproche, en orden a que no hubo una contratación de orden laboral sino de prestación de servicios a honorarios en el marco de las facultades que se otorgó al Servicio Salud Metropolitano Sur para abordar la situación específica de pandemia que vivió el país, se descarta que se den las premisas de los artículos 1, 7 y 8 del Código del ramo, como las consecuencias normativas que de ellos arrancan, desde que no estableció la existencia de una relación contractual de tipo laboral entre las partes, atendiendo a las prescripciones jurídicas pertinentes.

**Décimo:** Que, de esta manera, no se produce, así, ninguna de las fórmulas que autorizan prospere, tanto la causal de la letra c) del artículo 478 ya citada, como la esgrimida por contravención formal, falsa aplicación o errada



interpretación de una norma legal descrita en el artículo 477 enunciado, y corresponde desestimar el presente libelo recursivo en sus dos vertientes.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo prevenido en los artículos 478 y siguientes del Código del Trabajo, se declara que **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por la demandante Antonia Paz de Teresita de Jesús Guajardo Brito, en contra de la sentencia de nueve de octubre de dos mil veinticuatro, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, en los autos RIT O-828-2023, la que en consecuencia no es nula.

**Regístrese y comuníquese.**

Redactado por el ministro Sr. Roberto Contreras Olivares.

**Rol N°668-2024 Laboral.**

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los Ministros Señor Roberto Contreras Olivares, señora Liliana Mera Muñoz y Fiscal Judicial señor Jaime Salas Astrain.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TQPRXSYWFJG

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Roberto Ignacio Contreras O., Liliana Mera M. y Fiscal Judicial Jaime Ivan Salas A. San Miguel, dieciseis de enero de dos mil veinticinco.

En San Miguel, a dieciseis de enero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: TQPRXSYWFJG